

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

ÉLITES DE COSTA RICA:

Del 'nuevo orden a la agitación'

Álvaro Murillo

Setiembre 2023



Con el cambio de siglo se recompusieron y diversificaron las minorías poderosas, de la mano de la apertura del modelo económico y un creciente cuestionamiento a lo público.



La llegada de Rodrigo Chaves al Gobierno profundiza las alteraciones que en décadas recientes experimentan las élites del país más estable de Centroamérica.



El discurso contra los "ticos con corona" y acciones que favorecen a otros grupos privilegiados se suman a las tendencias de la economía, a la erosión de los instrumentos de incidencia política y a una relación amor/odio con el Estado y con su sistema institucional.

1

INTRODUCCIÓN

Costa Rica enfrenta momentos de acelerados cambios políticos que reflejan en buena medida los procesos de transformación que también ocurren en la sociedad, sobre todo en los modos de vida de las personas y su capacidad de alcanzar el bienestar que internacionalmente se le ha reconocido al país hasta hace poco tiempo. Los factores son abundantes, pero las maneras de repartición de la riqueza y la conexión de esta con el poder resultan ser claves para comprender las tendencias y eventos en el sistema político, en la vigencia del Estado Social de Derecho y en la fortaleza de las instituciones que lo sustentan. El terreno del juego democrático se mueve más de lo que promedian las costumbres costarricenses y altera el escenario que es, a su vez, un activo para la generación de riqueza.

El escenario no es del todo nuevo, pero presenta un elemento que puede acelerar las tendencias o revolver más el cuadro. Se trata del gobierno de Rodrigo Chaves con su promesa de ruptura ante las fuerzas tradicionales de la política y un altisonante discurso de combate a los poderes de grupos privilegiados, pero también por acciones en favor de ciertos sectores aventajados y las tensiones con los mecanismos de control y contrapeso del aparato democrático que en otros países aún se le reconocen al sistema costarricense.

Son tiempos de cambios acelerados, de efectos colaterales o de estrategias más o menos evidentes que se añaden a la ruta de transformación de las élites a lo largo del siglo XX. La velocidad ha sido mayor en las últimas tres décadas, pero incluso superior en la última década llena de reconfiguraciones políticas y eventos que han golpeado también al bastión judicial y a algunos de los empresarios más poderosos del medio local, con un trasfondo de corrupción marcado en la manera como la población asume el juego de poder.

La transformación está en desarrollo y dificulta seguir el rastro de las élites o retratarlas en su justa dimensión, pero la tarea es ineludible para comprender las ventajas relativas que aún goza Costa Rica frente a otros países, sobre todo ante América Latina o en el contexto de Centroamérica, basadas en buena parte en el modelo económico de generación de la riqueza y la repartición de esta con el rol del Estado.

Esto pasa, sin duda, por los márgenes de acción de las élites, su comprensión sobre la sociedad y el tipo de participación que asumen frente a lo político o, más allá, lo público en un país donde el papel del Estado es protagónico en la economía. Por eso conviene mirar a grandes rasgos la transformación de esas minorías selectas en la sociedad costarricense, a la luz de episodios de conocimiento público que pueden ser factores, aceleradores o señales de las tendencias.

Ejemplos de estos elementos son la detonación de grandes escándalos en negocios como el llamado “cementazo” en 2017 sobre cuestionados créditos de la banca pública para la importación de cemento desde China o el “caso Cochinilla” sobre contratos de obras viales en 2021 (ambos asociados a aparente corrupción en instituciones públicas) y la inconclusa reconfiguración política posterior al bipartidismo expresada en los gobiernos desde el 2014. También los cambios en patrones de consumo y de producción asociados a las tecnologías digitales, además de las consecuencias múltiples de la pandemia, aún dignas de estudio.

2

ÉLITES TRADICIONALES

El momento revuelto, sin embargo, permite ver las marcas de las élites tradicionales sobre el terreno, con la existencia de grupos económicos cuyas raíces se encuentran en las oligarquías agrícolas de inicios del siglo XX o en las industrias impulsadas después de la Guerra Civil de 1948.

El triunfo de los revolucionarios liderados por José Figueres Ferrer permitieron tomar el mando en un país donde, decía él, los presidentes se designaban antes a dedo en el Club Unión, una frase que el historiador David Díaz refuta advirtiendo que desde el siglo XIX hubo limitaciones políticas al poder económico y que las campañas electorales eran considerablemente competitivas.

En la segunda mitad del siglo XX surgieron nuevas industrias, la planilla del Estado creció en volumen y beneficios, y se consolidó el modelo de bienestar social que a muchas familias permitió el ascenso en calidad de vida y la consolidación de una amplia clase media.

El modelo de “sustitución de importaciones” se desarrolló después de 1960 y reformó el mapa de élites costarricenses. También se abrieron paso empresas bajo el alero del Estado en su rol de gran comprador de bienes y servicios, además de financista mediante la poderosa banca pública que siempre estuvo en manos de operadores cercanos al empresariado.

Un ejemplo de esa clase empresarial surgida al amparo del Estado es Carlos Cerdas Araya, un descendiente de familia sencilla a mitad del siglo XX en la ciudad de Cartago, quien de grande llegó a ocupar un lugar en el olimpo de las personas más ricas de Centroamérica.

Era el hijo de un hombre que alquilaba maquinaria al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los años 70, momento de fuerte desarrollo de infraestructura pública, pero aprovechó el recambio generacional para dar un salto sobre otras compañías y dominar en el nuevo siglo el sector de la construcción y mantenimiento de obra pública vial.

La empresa de Cerdas, MECO, saltó fronteras hasta ganarse el título de empresa transnacional, quizás la única nacida en un país donde las familias ricas nunca han llegado ni cerca de los grupos poderosos de otros países centroamericanos.

Cerdas era un nuevo millonario con el mérito de haber amasado una fortuna incluso superior a las de algunas de las familias históricamente poderosas con raíces criollas o inmigrantes, que habían ido moviendo sus capitales por distintas industrias según qué momentos.

Hacia finales del siglo XX tomó impulso el sector turismo y la diversificación de servicios financieros, además del desarrollo inmobiliario, que recogían en buena medida los capitales procedentes de las herencias de tiempos agrícolas o de comercio.

Se mezclaban con las empresas establecidas merced a los gruesos flujos de inversión extranjera directa que propició el surgimiento de una capa de ‘hombres de negocios’ que en poco tiempo se instituyó como una nueva élite, aunque con características distintas a las tradicionales y sobre todo con conductas diferentes ante la vigencia del Estado social.

Esto no son propietarios, sino apoderados en una suerte de economía de enclave que hace a algunos estudiosos sentirse tentados a compararlos con los jefes de la United Fruit Company, la compañía estadounidense que operaba a sus anchas un siglo atrás.

3

LAS NUEVAS ÉLITES

Este grupo más globalizado presenta un menor interés en el juego político, como una muestra de la distancia con lo público, a excepción de los espacios que permitan perpetuar los negocios. A diferencia de las oligarquías o los grupos económicos predominantes del siglo XX, estos grupos están desdibujados en términos culturales y no ven problema en el deterioro de la base institucional costarricense o en las amenazas al sustrato democrático del sistema político, como explicó en entrevista David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de la UCR. A fin de cuentas, sus vidas transcurren lejos de los espacios públicos; se educan en lo privado, viven detrás de muros, son grandes consumidores de los negocios de salud y fácilmente, si fuera necesario, pueden instalarse fuera del país.

A ellos se sumó la llegada de algunos capitales de países vecinos que intentaban diversificar sus operaciones en un territorio libre de los sobresaltos políticos de sus países de origen, sobre todo centroamericanos, y venezolanos, pero también colombianos y mexicanos.

Entre todos ellos, Cerdas ocupaba un sitio propio hasta que en 2021 cayó como uno de los principales sospechosos de la red de sobornos que por muchos años ha cubierto el sector de las concesiones de obras viales públicas, de acuerdo con una investigación policial desarrollada desde 2019. El "caso Cochinilla" exhibió mensajes que parecían antagónicos y no

lo eran: 1) el empresario manejaba el aparato público que requería para controlar el sector y ser, por ejemplo, el principal proveedor del Estado en 2018. 2) El aparato público, en su flanco judicial, proveyó un sistema de control que funcionó para atender las denuncias iniciales y permitir desarrollar investigaciones que derivaron en la detención y en prisión preventiva por nueve meses para él y para otra rica empresaria de la construcción llamada Mélida Solís.

Las investigaciones siguen su curso, pero el caso por sí solo agitó el ambiente entre las minorías selectas y en el paisaje político, pues el freno a las operaciones de MECO dejó cuesta arriba la promesa del gobierno de Carlos Alvarado de entregar en su despedida, en 2022, un país distinto en términos de infraestructura pública. Era una vuelta de rosca a la percepción sobre la corrupción y la desconfianza en la clase política que ya se habían evidenciado cinco años atrás con el caso "cementazo". Trataba de un joven empresario y sus acciones para intentar romper el duopolio del cemento en Costa Rica, pero con manejos que se revelaron en 2017 y que acabaron comprometiendo a bancos estatales, al círculo primario del presidente Luis Guillermo Solís y a la cúpula del Poder Judicial, que se sumió en una crisis de la cual aún no se recupera del todo.

4

LAS ÉLITES Y LA POLÍTICA

Ese fue un hito en la administración Solís Rivera (2014-2018), un político que emergió del fondo de las encuestas y acabó con el péndulo bipartidista de casi cinco décadas debido a su desgaste y al efecto de generaciones que veían ya lejanos los hechos de mitad del siglo XX que dieron pie a las dos grandes

agrupaciones, una socialcristiana y la otra socialdemócrata. El candidato de centroizquierda del Partido Acción Ciudadana (PAC) salió beneficiado de los movimientos de grupos empresariales dirigidos a frenar a la izquierda de José María Villalta, aunque apenas al tomar el poder se hizo evidente que no había puentes

entre los nuevos gobernantes y la clase empresarial, pues debían empezar por conocerse. “La UCCAEP era una sombrilla, es cierto, no se había quebrado todavía, pero habría sido un gran error pensar que era la única voz de los grupos económicos”, reconoce el exmandatario.

Nunca hubo gran conexión en el gobierno de Solís a pesar de la continuidad de políticas públicas que mantuvieron el modelo económico dividido en dos: un motor dinámico y sofisticado del sector ligado al comercio exterior y la inversión extranjera, beneficiado por el régimen de zonas francas, y otro más lento y desgastado que, sin embargo, calza más con las características predominantes de la población necesitada de empleo. El esquema de generación de riqueza en el país se prolongaba a pesar de algunos cortocircuitos en grupos de influencia política y del escándalo focalizado del “cementazo”.

Pese al discurso de Solís y de su sucesor, Carlos Alvarado, el poder del sector de transporte público se mantuvo incólume. La empresas autobuseras concesionarias del Estado, con dirigentes que con frecuencia aparecen en las listas de financiamiento de partidos políticos, demostraron la capacidad de continuar con su poder de influencia política y han logrado que se perpetúen sus beneficios.

5

ROMPER EL MOLDE

Así llegó Chaves a colarse de manera sorpresiva en la segunda ronda electoral de las elecciones presidenciales de 2022 y consolidar su mensaje amenazante contra el statu quo, agradable para grandes sectores populares marginados por el sistema de bienestar, pero también para ciertos grupos privilegiados que vieron una oportunidad de ganar peso relativo e incidencia en el Estado frente a otras élites asociadas a los tres partidos que habían gobernado en las últimas décadas. La victoria definitiva hizo que el economista de larga carrera en el Banco Mundial llevara esa bandera al poder, desde donde durante todo el año mantuvo y afirmó el discurso “por el pueblo”, pero haciendo también considerables concesiones a grupos de interés económico, incluidos algunos de los que le apoyaron en la campaña electoral.

Cobra especial relevancia la polarización del planteamiento social de Chaves, que coloca por un lado al “pueblo” con frecuentes alusiones a barrios pobres y, por otro, a la clase adinerada, entre quienes señala a los “ticos con corona” en alusión a las élites que, asegura, se han aprovechado del poder de influencia para acomodar leyes y reglas a su favor. Ha sido especialmente explícito al referirse al tradicional diario La Nación

En general, la administración Alvarado no logró atenuar el mapa de poder económico ni revertir la tendencia de desigualdad en Costa Rica, aunque sí experimentó el rechazo de las cámaras empresariales tradicionales ante la reforma fiscal de 2018 que, sin embargo, resultó limitada en su propósito de progresividad.

Alvarado, que tuvo como ministro de enlace empresarial a un rico propietario de negocios de las zonas francas, impulsó también propuestas de ley que redujeron el músculo del funcionariado público y su capacidad de organizarse en huelgas, un derecho de por sí limitado en Costa Rica por la inexistencia de sindicatos en el sector privado. Coincidió con una crisis de la representatividad sindical en el sector público comparable con los aprietos de las organizaciones patronales para mantener su hegemonía, con dirigentes que incluso llegaron a pactar con grupos que llamaban a la inestabilidad social en episodios de protesta en las calles. Ese cóctel se sumó a las repercusiones del “caso Cochinilla” y sus efectos adversos sobre los planes para desarrollar obra pública, mientras por otro lado se elevaban el volumen de instituciones de corte religioso que, al margen de su poder económico, engrosaban el bloque de rechazo y abonaban aún más el terreno para la irrupción de la figura de Rodrigo Chaves con su discurso anticorrupción y antiélites.

y otros propietarios de medios, llamándolos “señores feudales” y acusándolo de ser protegidos por los partidos políticos tradicionales.

Sin embargo, el mandatario desde un principio incorporó en su gabinete a figuras cercanas a cámaras empresariales y les dio espacio en los actos públicos bajo la idea de que mejorar el clima de negocios redundará eventualmente en empleos para las clases necesitadas de ingresos propios. Mientras tanto, la inversión social se estancó bajo el criterio de las reglas fiscales y la estabilidad macroeconómica, con recorte de miles de becas, de obras públicas y de presupuesto para educación universitaria.

En paralelo, la administración Chaves intenta concentrar potestades distribuidas hasta ahora en instituciones centralizadas y muestra su afán de controlar de manera más directa a instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dos de los mayores clientes de decenas de empresas que venden servicios o bienes por montos de millones de dólares. Para ello

el Ejecutivo ha aplicado incluso decisiones discutibles en lo legal y ha enviado los casos a manos del Poder Judicial, mientras desde el mandatario salen frecuentes críticas a este poder de la República e incluso de acciones corruptas o cuestionamientos a la Sala Constitucional, que en la coyuntura ha elevado el perfil de control del Gobierno con varios fallos críticos.

Es clara la propensión a someter las instituciones de contrapeso y de control a mayores tensiones, un estilo que respalda una parte importante de la población que así lo muestra en las encuestas. Como cuestionó en campaña al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo ha hecho ahora con las distintas instancias judiciales, con la Contraloría General de la República, con los partidos opositores en la Asamblea Legislativa, con medios de comunicación críticos, ocasionalmente con fuerzas sindicales e incluso con organismos internacionales que señalan alguna falencia en la actual administración.

Difícil, sin embargo, es hallar en los registros algún enfrentamiento con grupos empresariales, salvo casos específicos que ha presentado como un intento de romper añejos privilegios o mejorar los servicios. Así lo hizo para la remoción de la empresa concesionaria de revisión de la flota vehicular y la ruptura del contrato con la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde), la agencia de atracción de inversión extranjera que ha resultado clave para las nuevas industrias de la economía, aunque las autoridades actuales le achacan haber marginado por años a las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La Uccaep ha sido oscilante en el apoyo al Gobierno, con aplausos a políticas como la legalización de jornadas laborales de 12 horas, pero con la reprobación a decisiones como la destitución arbitraria de los directivos de la CCSS, incluidos representantes patronales, desde el Gobierno central. En esta ocasión advirtieron la necesidad de defender “la institucionalidad democrática”, un concepto relativizado en otras instancias del espectro de poder económico. Sin embargo, esta fortaleza institucional y el régimen de Derecho sigue siendo una de las ventajas que exhiben las autoridades para la captación de inversiones extranjeras, incluso las que pueda atraer procedentes de países no democráticos, orígenes de grandes fondos con los cuales ha habido acercamientos.

Otras decisiones, como la llamada “democratización de la pauta estatal” (en detrimento de los medios de comunicación tradicionales y en beneficio de nuevas plataformas que dan señales de afinidad con el gobierno actual) alteran también los flujos usuales de dinero público como en mayor volumen puede estar ocurriendo en las grandes instituciones descentralizadas.

6

CIERRE

La posibilidad de nuevos actores o nuevos de acomodos de las minorías selectas del país es latente; los recientes desequilibrios se han sumado a las tendencias aceleradas de los últimos años, aderezadas también por la corriente imperante en países de la región, y dejan entre signos de pregunta los nombres y los modos de las élites vigentes para los próximos años.

Mientras tanto, abundan indicios y pronósticos de mayor polarización social, escasean las proyecciones de un acortamiento de las desigualdades y parece inevitable un deterioro del pacto social que sostuvo al estado de bienestar para beneficio de la mayoría.

ACERCA DE LA AUTORA

Álvaro Murillo es periodista en Semanario Universidad y colaborador de medios internacionales, con 20 años de experiencia en la cobertura de política, estructuras de poder e institucionalidad pública.

Correo: alvaromurillo@yahoo.com

IMPRESIÓN

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Costa Rica

costarica@fesamericacentral.org

<https://americacentral.fes.de/>

Responsable:

Eva Nelles

Representante Fundación Friedrich Ebert para El Salvador y Panamá.

Coordinadora:

Argerie Sánchez

a.sanchez@fesamericacentral.org

Costa Rica, Setiembre, 2023

SOBRE ESTE PROYECTO

En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no. 6454 que lo ratifica. Por más de 55 años la Fundación en Costa Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses.

En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central. Por un lado, El Proyecto Transformación Social Ecológica, que busca contribuir

al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de justicia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en proceso de defensa de la democracia y los Derechos Humanos.

El concepto de planificación y las actividades de la FES en red de las seis oficinas centroamericanas consiste en la coordinación, el intercambio y la articulación regional con implementación nacional

Para más información, consulte

<https://www.americacentral.fes.de>

ISSN
2413-6603

ÉLITES DE COSTA RICA:

‘Del nuevo orden a la agitación’



Grupos minoritarios de poder económico tomaron parte en el siglo XX en la construcción de logros sociales e institucionales que permitieron a Costa Rica una razonable estabilidad admirada en la región latinoamericana.

Los eventos alrededor de la Guerra Civil de 1948 y sus consecuencias impulsaron nuevas élites alrededor de actividades económicas propulsadas desde un aparato estatal robusto.

Hacia final de siglo el modelo de apertura comercial y de inversiones introdujo nuevas industrias que modificaron el mapa de poder interno y generaron nuevos segmentos de



riqueza con menos apego por el diseño institucional.

Se reconfiguran las organizaciones de representación empresarial en paralelo a acelerados cambios del sistema de partidos y eventos judiciales que alteraron más los cuestionamientos a las dinámicas de poder, terreno propicio para la llegada de un gobierno que mezcla la retórica antiélites con acciones favorables a ciertos grupos privilegiados.

Pasadas siete décadas desde la Revolución del 48, la administración Chaves Robles promete una “revolución pacífica” de implicaciones aún inciertas para el



reparto del poder en los núcleos más favorecidos y para la vigencia de condiciones u oportunidades sociales que permitan atenuar el descontento con los resultados del sistema democrático y revertir el deterioro de la paz social.

Más información sobre el tema está disponible aquí:
<https://www.americacentral.fes.de>